

3.3. Niveles de cumplimiento de normas internacionales de protección de los derechos de las mujeres.

Es importante destacar que, debido a que el presente análisis se realizó a través de la revisión de expedientes de procesos reales, se estableció con las autoridades que participaron en el mismo, que los resultados estarían protegidos, por tanto y a efecto de cumplir con los compromisos adquiridos a partir de este momento se otorga una clave a cada una de las Entidades Federativas que participaron, lo cual de ninguna manera limita los resultados, ni las conclusiones a que se llegaron.

Como se ha mencionado el objetivo principal del presente estudio es llevar a cabo un análisis del nivel de cumplimiento de dos instrumentos internacionales, a saber, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (por sus siglas en inglés), que se pudo detectar a través del análisis de expedientes en materia penal y en materia familiar.

Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Artículo 1 establece: A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Establece además, en su Artículo 2, una serie de obligaciones para los Estados Parte, principalmente:

- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
- c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
- d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar para que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
- f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Recomendación 19 de la CEDAW

La cita de recomendación establece:

24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que:

A) Los Estados Parte adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo.

B) Los Estados Parte velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención.

C) Los Estados Parte alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.

D) Se adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer.

E) En los informes que presenten, los Estados Parte individualicen la índole y el alcance de las actitudes, costumbres y prácticas que perpetúan la violencia contra la mujer, y el tipo de violencia que engendran. Se debe informar sobre las medidas que hayan tomado para superar la violencia y sobre los resultados obtenidos.

F) Se adopten medidas eficaces para superar éstas actitudes y prácticas. Los Estados deben introducir programas de educación y de información que ayuden a suprimir prejuicios que obstaculizan el logro de la igualdad de la mujer (Recomendación N° 3, 1987).

G) Se adopten medidas preventivas y punitivas para acabar la trata de mujeres y la explotación sexual.

H) En sus informes, los Estados Parte describan la magnitud de todos estos problemas y las medidas, hasta disposiciones penales y medidas preventivas o de rehabilitación, que se hayan adoptado para proteger a las mujeres que se prostituyan o sean víctimas de trata y de otras formas de explotación sexual. También deberá darse a conocer la eficacia de éstas medidas.

I) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la indemnización inclusive.

J) Los Estados Parte incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en el lugar de trabajo.

K) Los Estados Parte establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento.

L) Los Estados Parte adopten medidas para poner fin a éstas prácticas y tengan en cuenta las recomendaciones del Comité sobre la circuncisión femenina (Recomendación N° 14) al informar sobre cuestiones relativas a la salud.

M) Los Estados Parte aseguren que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad.

N) Los Estados Parte den a conocer en sus informes la amplitud de estos problemas e indiquen las medidas que hayan adoptado y sus resultados.

O) Los Estados Parte garanticen que en las zonas rurales los servicios para víctimas de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las comunidades aisladas.

P) Las medidas destinadas a proteger de la violencia incluyan las oportunidades de capacitación y empleo y la supervisión de las condiciones de trabajo de empleadas domésticas.

Q) Los Estados Parte informen acerca de los riesgos para las mujeres de las zonas rurales, la amplitud y la índole de la violencia y los malos tratos a que se las somete y su necesidad de apoyo y otros servicios y la posibilidad de conseguirlos, y acerca de la eficacia de las medidas para superar la violencia.

R) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuren las siguientes:

I) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar;

II) legislación que elimine la defensa del honor como justificación para atacar a las mujeres de la familia o darles muerte;

III) servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas;

IV) programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar;

V) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso deshonesto.

S) Los Estados Parte informen acerca de la amplitud de la violencia en el hogar y el abuso deshonesto y sobre las medidas preventivas, punitivas y correctivas que hayan adoptado.

T) Los Estados Parte adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas:

I) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo;

II) medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer;

III) medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.

U) Los Estados Parte informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de la frecuencia de cada una y de sus efectos para las mujeres víctimas.

V) Los informes de los Estados Parte incluyan información acerca de las medidas jurídicas y de prevención y protección que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém Do Pará

Encontramos en el cuerpo del documento una serie de medidas y mecanismos jurídicos y administrativos que deben adoptar las partes para llevar a buen fin el compromiso, entre los que cabe destacar los señalados por los Artículos 4, 7 y 8, respectivamente.

Artículo 4:

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

- A) El derecho a que se respete su vida;
- B) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
- C) El derecho a la libertad y a la seguridad personal;
- E) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
- F) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
- G) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

Artículo 7:

Los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

- A) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
- B) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- C) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
- D) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
- E) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
- F) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

G) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

H) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

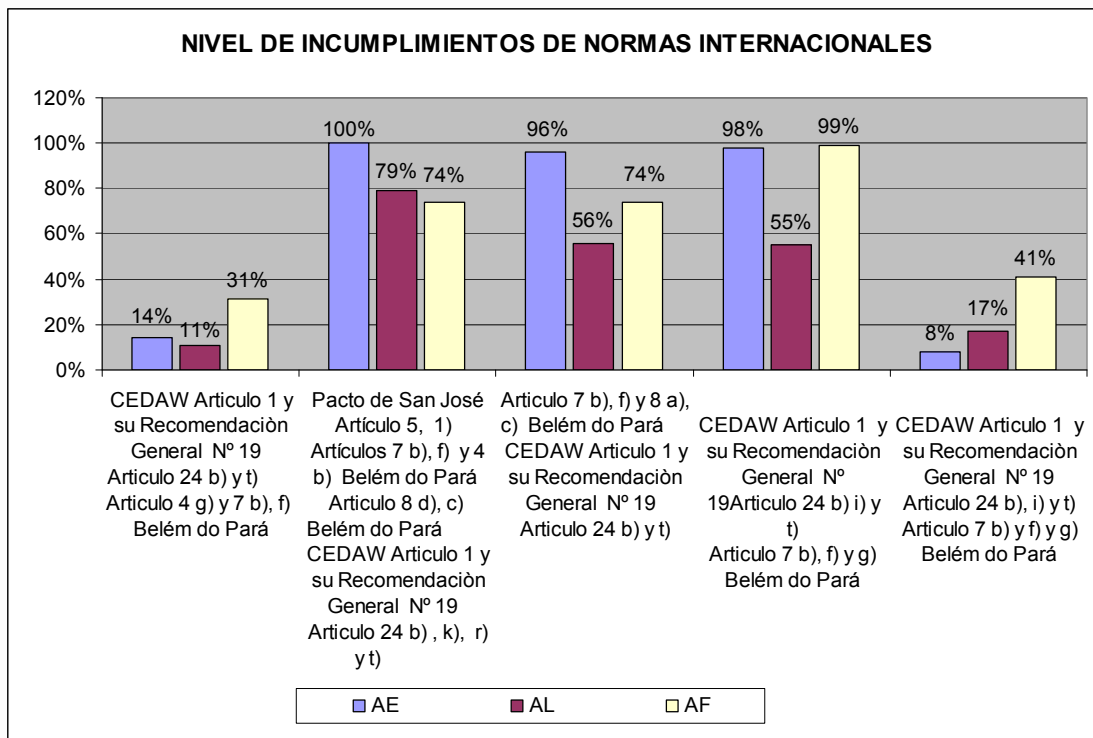
Artículo 8:

Los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

D) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

F) Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social.

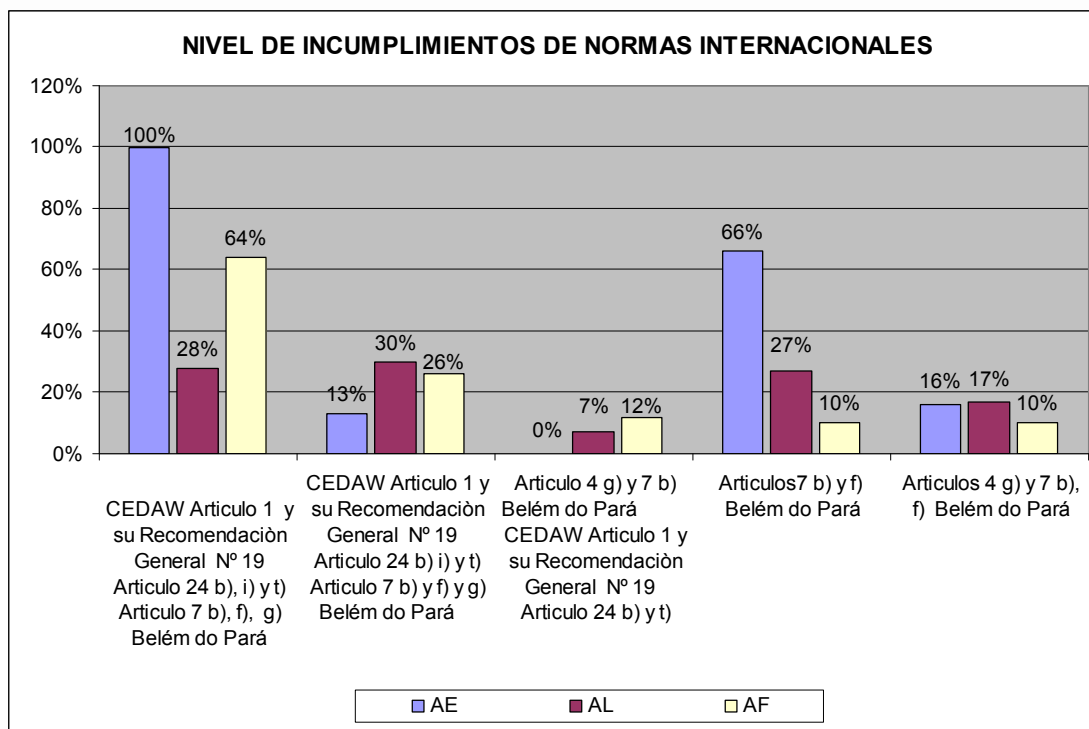
Las siguientes gráficas muestran el nivel de cumplimiento de las principales disposiciones en materia de protección a los Derechos Humanos de las Mujeres por parte de las autoridades Judiciales y Ministeriales en los expedientes analizados que están previstos principalmente en los siguientes Artículos de las convenciones antes citadas y la Recomendación 19 de la CEDAW.



Así, en el 14% de las causas analizadas en la Entidad Federativa AE; en el 11% de AL y en el 31% de AF, al no tomar en cuenta en su determinación la/el Agente del Ministerio Público la agravante del delito relacionado con la edad de la víctima, con lo que incumple con los Artículos 1 de la CEDAW; 24 incisos “b” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, así como 4 inciso “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará. Además, identificamos que en AE, AL y AF en 100%, 79% y 74% de los casos analizados, respectivamente, no se cumplen los Artículos 5. 1 del Pacto de San José; 4 inciso “b”, 7 incisos “b” y “f” y 8 incisos “d” y “c” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW, así como 24 incisos “b”, “k”, “r” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, ya que no obra en autos que la/el Ministerio Público otorgara asistencia psicológica, medica o legal a la víctima y la legislación establece el derecho a la citada asistencia.

También, tenemos que en AE en el 96% de los expedientes, en AL en 56% y en AF en 74%, al no obrar en autos que la/el Ministerio Público realiza la orientación de la víctima respecto a sus derechos y las diligencias que se llevan a cabo se incumplen los Artículos 7 incisos “b” y “f”, 8 incisos “a” y “c” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW, así como 24 incisos “b” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Por otra parte, debido a que no obran en los autos que la/el Ministerio Público realiza alguna diligencia durante la averiguación previa para acreditar el monto de la reparación del daño, se incumplen los Artículos 7 incisos “b”, “f” y “g”, de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW, así como 24 incisos “b” “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, lo anterior se da en el 99% de los asuntos analizados en AE, 55% en AL y 99% en AF. Las últimas columnas de la gráfica anterior muestran que en AE, AL y AF en 8%, 17% y 41% de los casos, respectivamente, no se cumplen los Artículos 7 incisos “b”, “f” y

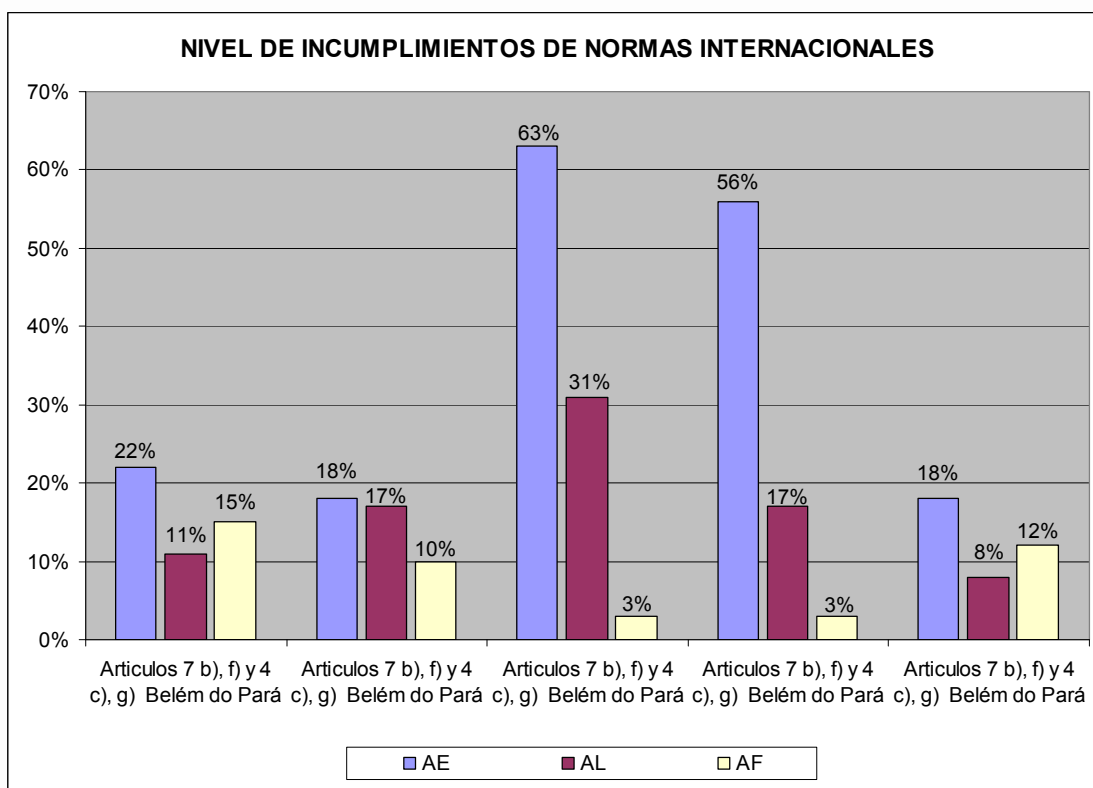
“g”, de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW, así como 24 incisos “b” “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, ya que no consta en las actuaciones que la/el Ministerio Público solicite en las conclusiones acusatorias la reparación del daño material a la víctima.



La gráfica anterior muestra que en AE en el 100% de los casos, en AL en 28% y en AF en 64%, la/el Ministerio Público no solicita en las conclusiones acusatorias la reparación del daño moral a la víctima, con lo que se violan los Artículos 7 incisos “b”, “f” y “g”, de la Convención de Belém do Pará, el Artículo 1 de la CEDAW, así como el 24 incisos “b” “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Además, identificamos que en AE, en AL y en AF en 13%, 30% y 26% de los casos analizados, respectivamente, no se cumplen con los Artículos 7 incisos “b”, “f” y “g”, de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW, y 24 incisos “b” “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, ya que en la sentencia se absuelve al procesado de la reparación del daño, a pesar de que su monto pudo cuantificarse con base en la pruebas presentadas en la instrucción por la coadyuvancia.

También, tenemos que en AL en 7% de los casos analizados y en AF en 12%, al no tomar en cuenta en la sentencia la calidad específica de la víctima al tratarse de una menor de 12 años, se incumplen los Artículos 4 incisos “g” y “f” y 7 inciso “b” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Por otra parte, debido a la falta de motivación de los elementos del cuerpo del delito en el ejercicio de la acción penal, se incumplen los Artículos 7 incisos “b” y “f” y “g”, de la Convención de Belém do Pará; lo anterior se da en

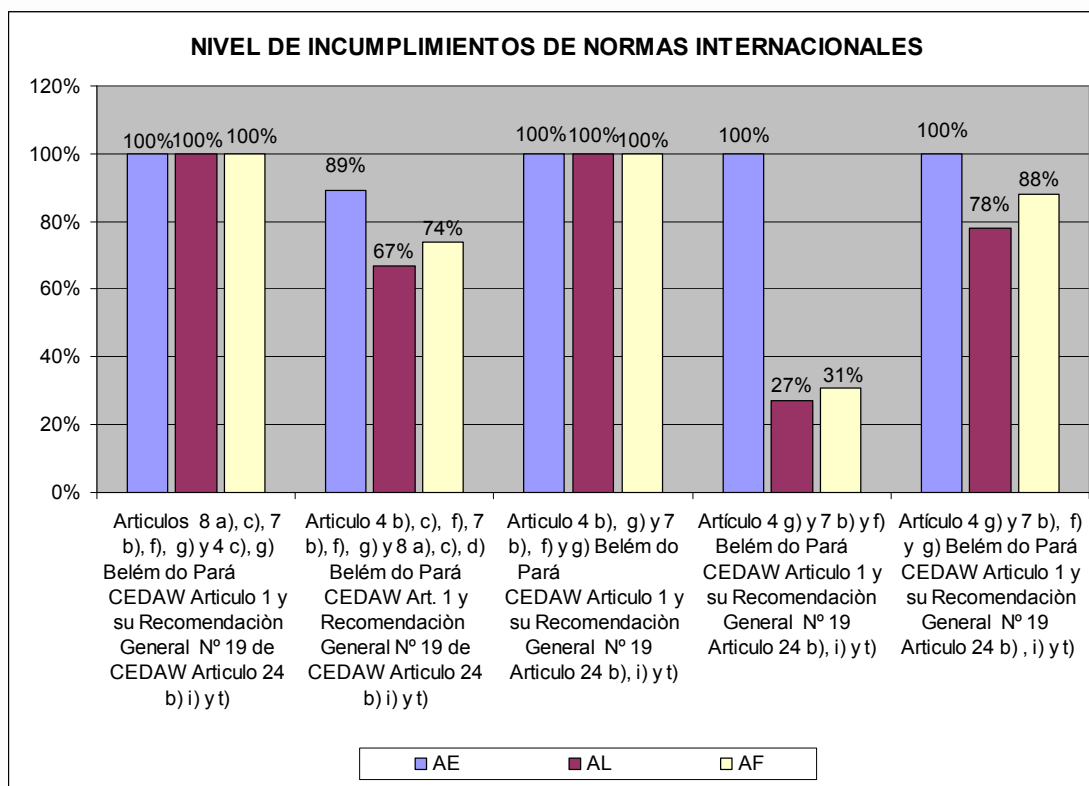
el 66% de los asuntos analizados en AE, 27% en AL y 10% en AF. Las últimas columnas de la gráfica anterior muestran que en AE, AL y AF en 16%, 17% y 10% de los casos, respectivamente, no se cumplen los Artículos 4 inciso “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, ya que la/el Ministerio Público no motiva debidamente el acuerdo de retención.



La gráfica anterior muestra que en AE en el 27% de los casos, en AL en 11% y en AF en 15%, el juzgado no motiva debidamente los elementos del cuerpo del delito en el auto de término constitucional, con lo que se violan los Artículos 4 incisos “c” y “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará. Además, identificamos que en AE, en AL y en AF en 18%, 17% y 10% de los casos analizados, respectivamente, no se cumplen los Artículos 4 incisos “c” y “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, ya que existe una falta de motivación de la probable responsabilidad en el auto de término constitucional.

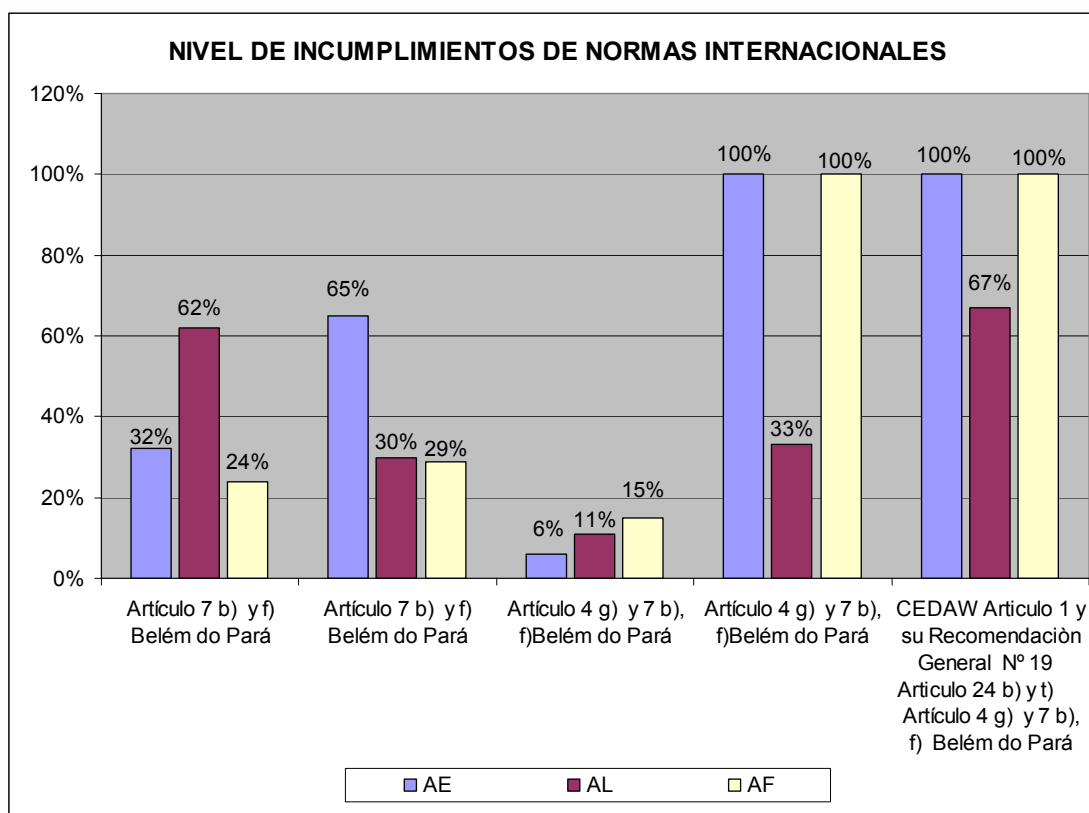
En el 63% de los casos analizados en AE; 31% de AL y 3% de AF, al no motivar debidamente los elementos del cuerpo del delito en las conclusiones de la/el Ministerio Público, se incumplen los Artículos 4 incisos “c” y “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará. Por otra parte, debido a la falta de motivación de la responsabilidad penal en las conclusiones de la/el Ministerio Público, se incumplen los Artículos 4 incisos “c” y “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, lo anterior se da en el 56% de los asuntos analizados en AE, 17% en AL y 3% en AF. Las últimas columnas de la gráfica anterior muestran que en el AE, AL y AF en 18%, 8% y

12% de los casos, respectivamente, no se cumplen los Artículos 4 incisos “c” y “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, ya que existe una falta de motivación de los elementos del cuerpo del delito en la sentencia.



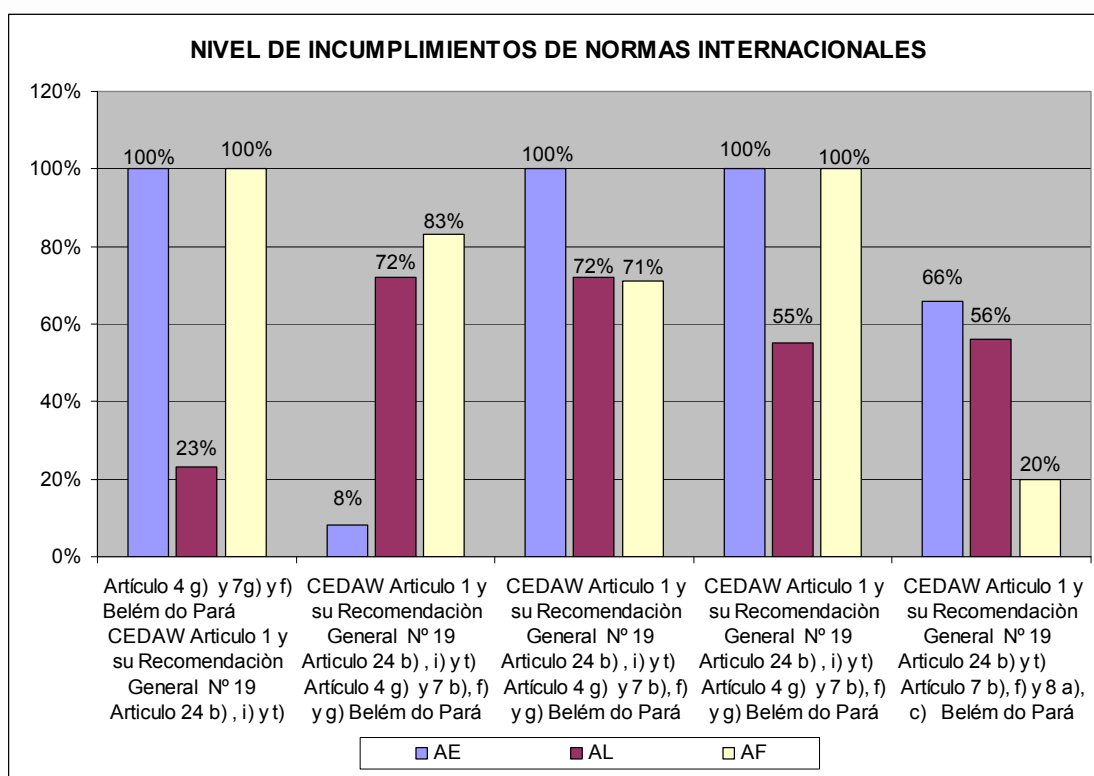
La gráfica anterior muestra que en AE, AL y AF en el 100% de los casos analizados, la/el Ministerio Público al solicitar el peritaje a las mujeres victimas de delitos sexuales no obra en autos que instruya a los especialistas a que determinen con exactitud el grado de afectación causado y las medidas necesarias a tomarse para subsanarlo, con lo cual no se establece un parámetro para determinar el daño y solo lo utiliza para acreditar los elementos del tipo penal, con lo que se violan los Artículos 4 incisos “c” y “g”, 7 incisos “b”, “f” y “g” y 8 incisos “a” y “c” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Además, identificamos que en AE, en AL y en AF en 89%, 67% y 74% de los casos analizados, respectivamente, no se cumplen los Artículos 4 incisos “b”, “c” y “f”, 7 incisos “b”, “f” y “g” y 8 incisos “a”, “c” y “d” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, ya que no consta en autos que el /la juez le informa a la victima su derecho a la reparación de daño, ni los mecanismos jurisdiccionales y administrativos que tiene a sus alcance para exigirla. También, tenemos que en AE, AL y AF en 100% de los casos analizados, al no obrar en autos que la/el juez a pesar de contar con la facultad de solicitar el desahogo de las pruebas para mejor proveer no ejercita esta facultad para obtener elementos que le permitan establecer la condena a la reparación del daño, con lo que se incumplen los Artículos 4 incisos “b”, y “g” y 7 incisos “b”, “f” y “g” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la

CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Por otra parte, debido a la ausencia en las conclusiones de acusación del o de la Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado de las proposiciones concretas de su pedimento, se incumplen los Artículos 4 incisos “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, lo anterior se da en el 100% de los asuntos analizados en AE, 27% en AL y 31% en AF. Las últimas columnas de la gráfica anterior muestra que en el AE, AL y AF en 100%, 78% y 88% de los casos, respectivamente, no se cumplen los Artículos 4 incisos “g” y 7 incisos “b”, “f” y “g” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, ya que no obra en autos que la/el Ministerio Público en las conclusiones fije el monto de reparación del daño o bien no señala cuales son los bienes que se habrán de embargar para garantizar el pago de la reparación del daño.



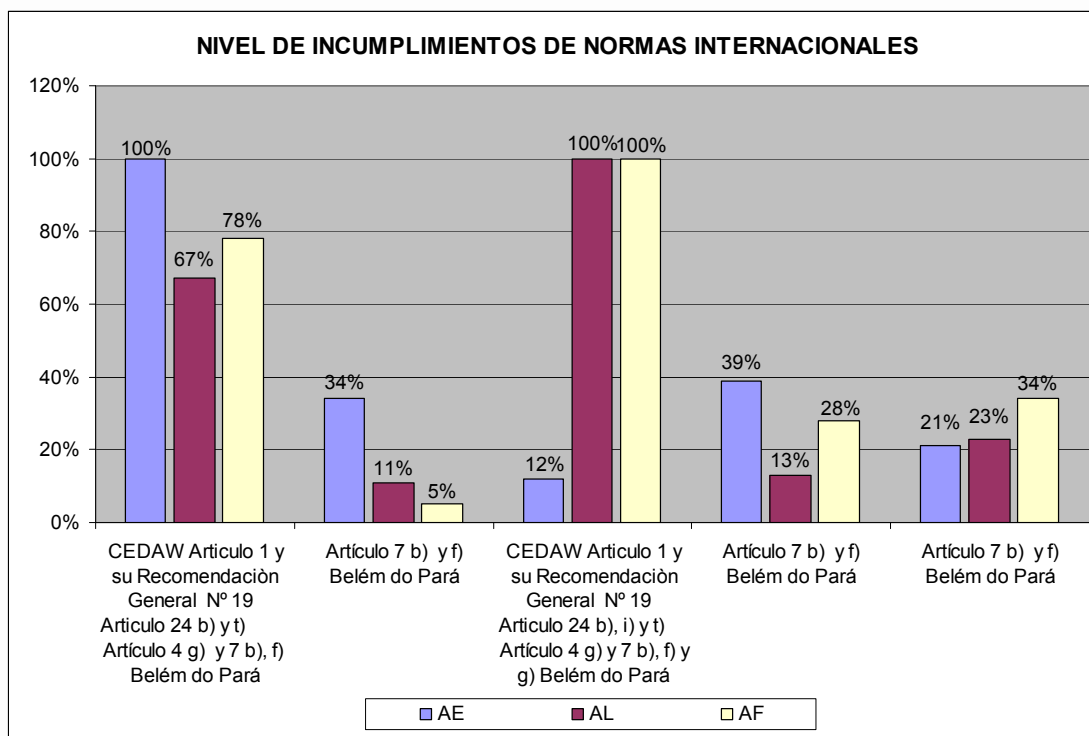
La gráfica anterior muestra que en AE en el 32% de los casos, en AL en 62% y en AF en 24%, la/el Ministerio Público presenta deficiencias respecto a la motivación, ya que la misma es incompleta, por lo que no abarca todos los elementos que han de acreditarse en la determinación del ejercicio de la acción penal, con lo que se viola el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará. Además, identificamos que en el AE, AL y en AF en 65%, 30% y 29% de los casos analizados, respectivamente, no se cumple el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, ya que no se realizan de manera correcta los exámenes periciales por utilizar los formatos-tipo

inadecuados o deficientes que en consecuencia afectan las garantías de la víctima. También, tenemos que en AE en 6% de los casos analizados, en AL en 11% y en AF en 15%, al no realizar o no rendir el dictamen pericial a pesar de que la/el MP ordena su realización, se incumplen los Artículos 4 inciso “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará. Por otra parte, debido a la deficiencia de dictámenes periciales, ya que no establecen como se llega a la conclusión de los mismos, pero más aún no determina el nexo causal entre la conducta desplegada por el acusado y el resultado de la misma, se incumplen los Artículos 4 inciso “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, lo anterior se da en el 100% de los asuntos analizados en AE, 33% en el AL y 100% en AF. Las últimas columnas de la gráfica anterior muestran que en AE, AL y AF en 100%, 67% y 100% de los casos, respectivamente, no se cumplen los Artículos 4 inciso “g” y 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, ya que existe una deficiencia de los peritajes realizados en materia de psicología, en que está basada la argumentación de las conclusiones.



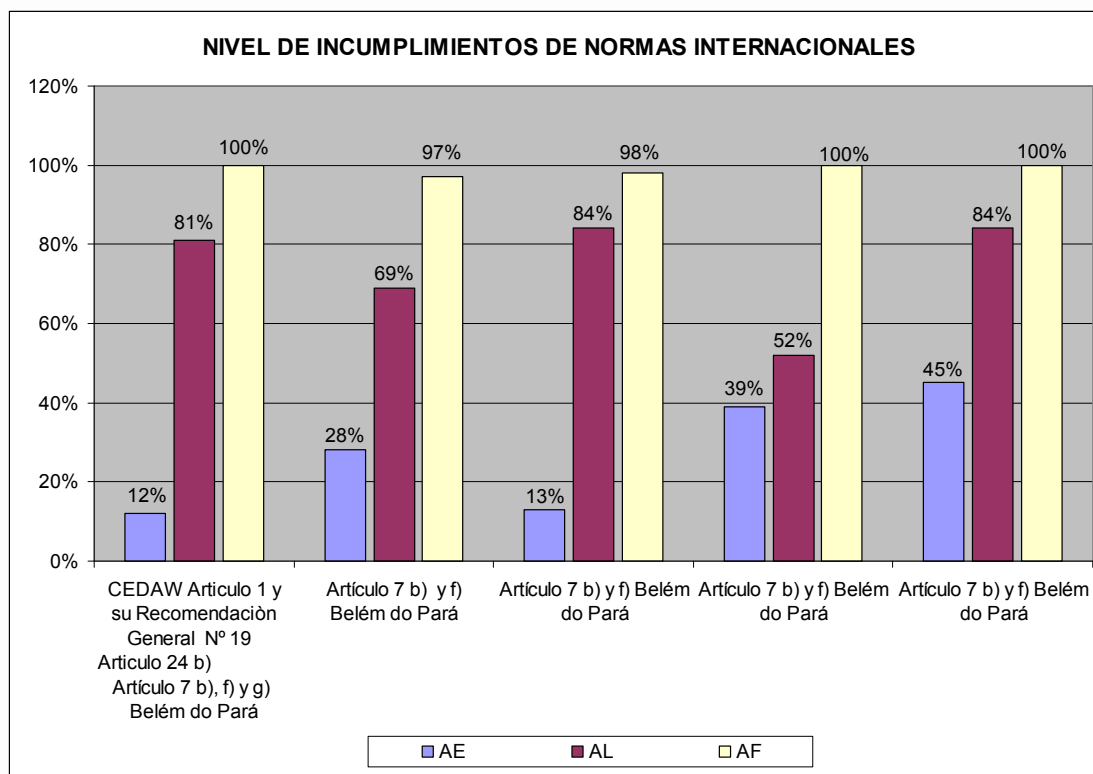
La gráfica anterior muestra que AE en el 100% de los casos analizados, en AL en el 23% y en AF en el 100%, no obra en los autos que la/el Ministerio Público señala bienes a embargar para garantizar el pago de la reparación del daño a la víctima, con lo que se violan los Artículos 4 inciso “g”, 7 incisos “f” y “g” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Además, identificamos que en AE, AL y AF en 8%, 72% y 83% de los casos analizados, respectivamente, no se cumplen los Artículos 4 incisos “g”, 7 incisos “b”, “f” y “g” de la

Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, ya que no obra en autos que se solicite la condena a la reparación del daño y faltan los argumentos para la misma en las conclusiones de el /la Ministerio Público. También, tenemos que en el AE, en 100% de los casos analizados, en AL en 72% y en AF en 71%, al no presentar las pruebas de reparación los daños que sirven para la condena, se incumplen los Artículos 4 incisos “g”, 7 incisos “b”, “f” y “g” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Por otra parte, debido a que no consta en los autos que la/el Ministerio Público fije el monto concreto de la reparación del daño a favor de la víctima, se incumplen los Artículos 4 inciso “g” y 7 incisos “b”, “f” y “g” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, lo anterior se da en el 100% de los asuntos analizados en AE, 55% en AL y 100% en AF. Las últimas columnas de la gráfica anterior muestran que en AE, AL y AF en 66%, 56% y 20% de los casos, respectivamente, no se cumplen los Artículos 7 incisos “b” y “f” y 8 incisos “a” y “c” de la Convención de Belém do Pará, Artículo 1 de la CEDAW y Artículo 24 incisos “b” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW, ya que no existe constancia que la/el Ministerio Público informara a la víctima de la totalidad de los derechos que le otorga la Constitución Federal y la legislación local.



La gráfica anterior muestra que en AE en el 100% de los casos analizados, en AL en el 67% y en AF en el 78%, existe una falta de seguimiento al tratamiento de atención psicológica a la víctima, con lo que se violan los Artículos 4 inciso “g”, 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, y “t” de la

Recomendación 19 de la CEDAW. Además, identificamos que en AE, AL y en AF en 34%, 11% y 8% de los casos analizados, respectivamente, no se cumple el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, ya que existe una fundamentación incorrecta por parte de la/del Ministerio Público. También tenemos que en AE, en 12% de los casos analizados, en AL en 100% y en AF en 100%, al no fundar el ejercicio de la acción penal en los casos de los delitos contra la familia, específicamente el de incumplimiento de deberes alimentarios, el deber legal que tiene el alimentista en el Código Civil, se incumplen los Artículos 4 incisos “g”, 7 incisos “b”, “f” y “g” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 incisos “b”, “i” y “t” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Por otra parte, debido a que existe una Falta de motivación en cuanto al valor de las pruebas, es decir aunque de manera general si se señalan los Artículos correspondientes al valor de las mismas, pero la/el jueza/ez no argumenta, ni determina expresamente que valor le da (pleno, preponderante o indicio), se incumple el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, lo anterior se da en el 39% de los asuntos analizados en AE, 13% en AL y 28% en AF. Las últimas columnas de la gráfica anterior muestran que en AE, AL y AF en 21%, 23% y 34% de los casos, respectivamente, no se cumple el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, ya que existe una falta de motivación en cuanto a que no exponen los argumentaciones sobre todos los elementos que tienen que acreditarse.



La gráfica anterior muestra que en AE en el 12% de los casos analizados, en AL en el 81% y en AF en el 100%, existe una falta de fundamentación en las sentencias en cuanto al deber legal de proporcionar alimentos, con lo que se violan los Artículos 7

incisos “b”, “f” y “g” de la Convención de Belém do Pará; 1 de la CEDAW y 24 inciso “b” de la Recomendación 19 de la CEDAW. Además, identificamos que en AE, AL y en AF en 28%, 69% y 97% de los casos analizados, respectivamente, no se cumple con el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, ya que falta el estudio de las causas de exclusión de la responsabilidad penal.

Por otra parte, debido a que no existe el análisis de la prescripción de la causa consignada por la/el Ministerio Público, se incumple el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, lo anterior se da en el 13% de los asuntos analizados en AE, 84% en AL y 98% en AF. También, tenemos que en AE, en 39% de los casos analizados, en AL en 52% y en AF en 100%, al valorar las pruebas, no dan razones para otorgar el valor de las mismas, no se cumple lo estipulado en el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará. Las últimas columnas de la gráfica anterior muestran que en AE, AL y AF en 45%, 84% y 100% de los casos, respectivamente, no se cumple el Artículo 7 incisos “b” y “f” de la Convención de Belém do Pará, ya que existe una falta de valoración conjunta de las pruebas y no se explica cómo se vinculan las pruebas para en su conjunto otorgarles cierto valor probatorio.